

Pueblos Originarios

6

Los árboles y el bosque. La mirada indígena desde una perspectiva Latinoamericana

Domingo Namuncura *

* Trabajador Social, Embajador de Chile en Guatemala.

Introducción

En relación con los Pueblos Indígenas de Chile, en varios trabajos publicados por el Barómetro de Política y Equidad en estos años recientes, la mirada fue normalmente desde nuestro país y teniendo como referente la realidad de nuestras comunidades, sus sueños, frustraciones y esperanzas. Es la mirada de los árboles que, estando muy cerca y siendo nutridos y frondosos, no siempre hacen posible ampliar la perspectiva. Por cierto, todo esto es relativo, pues ningún tema se aborda de manera aislada de los contextos internacionales. Pero la práctica de conocer y observar en terreno, de manera directa, otras realidades hace más profunda la mirada.

Es lo que acontece con la experiencia de ser testigo de la historia, la vida y la realidad de los Pueblos Indígenas de Centro América, particularmente, desde el fascinante escenario de Guatemala. En esta región de unos 46 millones de habitantes, más o menos siete millones y medio son indígenas y eso es un porcentaje muy significativo.

Guatemala

En Guatemala, en particular, uno de cada dos ciudadanos es descendiente directo de la rica y milenaria civilización Maya. Existen acá cuatro pueblos con una marcada identidad: el Pueblo Maya, que comprende casi el 49% de la población con 22 comunidades lingüísticas (achi', akateko, awakateko, chalchiteko, ch'orti, chuj, itza, ixil, jakalteco, popti, kaqchikel, k'iche, mam, mopan, poqoman, poqomchi, q'anjob'al, q'eqchi, sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tz'utujil y uspanteko). El 29% de los ciudadanos Maya pertenece a la comunidad K'iche; el 19% a la Q'eqchi y Kaqchikel y el 14% a la comunidad Mam. Lo más sorprendente para el observador extranjero es que, en estas comunidades, la gran mayoría de sus integrantes habla de manera fluida sus idiomas y en zonas rurales son todavía lenguas mucho más dominantes que el castellano.

Un 17% de los pueblos nativos se identifican con las comunidades Xinca y Garífuna, poblaciones de color que radican mayoritariamente en la localidad de Livingsstone y representan la rica herencia de la comunidad afrodescendiente. El Parlamento del Pueblo Xinca identifica a unas 160.000 personas como descendientes de esta cultura.

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Informe de 2005), la mayoría de la población indígena de Guatemala se concentra en el altiplano central, en la zona noroccidental y en el norte del país. Igualmente los indígenas están presentes en distintas regiones (acá, departamentos provinciales). Hay localidades como Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Quiché y Chimaltenango en donde la población indígena representa más del 75% de sus habitantes. En Huehuetenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Suchitepéquez constituyen entre el 50% y 70% de la población. En Sacatepéquez, San Marcos y Petén representan entre el 25% y 50% de los ciudadanos; y en Guatemala capital y otros nuevos departamentos representan menos del 25%.

Centroamérica

Centroamérica cuenta con seis naciones: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y su población promedia los 46 millones de habitantes. Dos millones pertenecen a la población afrodescendiente y mulata y se estima, a esta fecha (mayo 2015), que unos 8 millones son descendientes indígenas directos, de los cuales 6 millones están concentrados en Guatemala ("*Tierra de Arboles*", en kaqchikel).

Como es de comprender, estas hermosas tierras nativas y sus primeras comunidades aborígenes del siglo XV fueron las primeras en sufrir todo el inmenso rigor del "*descubrimiento*" y conquista llevados a cabo por España. Y este es el primer impacto que abrió heridas muy profundas en la historia de esta región, pues la fuerza de la conquista en estos territorios vírgenes fue tanto o más dura que en los procesos iniciales en Antillas y México. La existencia de densas montañas y la enorme dispersión de tribus hicieron más lenta y difícil la confrontación. Pedro de Alvarado inició con 300 soldados y 160 caballos la primera expedición hacia el sur de México y tomó la llamada "*ruta de los mercaderes aztecas*", pasando por el amplio valle de Quetzaltenango hasta Pachah, donde se libraron las primeras grandes batallas.

La tribu Kachiquel luchó junto con los españoles, como aliados tácticos. Era una tribu que mantenía profundas rivalidades históricas con los Zutuhiles (de Atitlán, donde hay un hermoso lago) y los Pipiles. Los españoles fueron particularmente rudos y bárbaros, hasta tal punto que el mismísimo capitán Alvarado fue sometido a un Juicio de Residencia, por sus propios pares. Fue enjuiciado por la crudeza de los medios de guerra empleados y por transgredir ciertas normas de la conquista, como, por ejemplo, no dar a conocer a los nativos el "*Requerimiento*", documento mediante el cual se obligaba a los conquistados a reconocer el señorío español, la fe católica y a los Reyes de España. Y si no lo hiciesen, entonces podían ser "*pasados por armas*". El capitán Alvarado olvidó ese "*procedimiento protocolar*" de la conquista y simplemente, para ahorrarse tiempo, pasó por armas a los nativos, bajo su ruta, sin leerles previamente el Requerimiento.

En 1524, Alvarado fundó la ciudad llamada Villa del Señor Santiago. Posteriormente se llamó "*Santiago de los Caballeros*" y más tarde tomó el nombre de "*Guatemala*". En solo siete meses, Alvarado y sus españoles, aliados con algunas tribus locales, lograron conquistar a sangre y fuego un muy amplio territorio desde el sur de México hasta Salvador, y sentaron las bases de una durísima colonización, sometiendo a los indígenas a la condición de mano de obra barata e imponiéndoles elevados tributos en oro, frutos, animales y especies. En algún momento de este brutal proceso hubo tribus que se rebelaron en contra de los abusos, pero fueron prácticamente aniquiladas.

La tenaza de la conquista sería reforzada con la llegada del capitán Gil González Dávila, que desembarcó en Honduras. Por el norte, fue Cristóbal Olid, que pasó previamente por La Habana. A ellos se sumó Francisco de las Casas y luego el capitán Luis Marín. Cuatro expediciones castellanas coparon entonces la región de Centroamérica, pero sus líderes se enfrascaron en riñas políticas internas, propias de la lucha por la hegemonía y control de los nuevos territorios, hasta que Hernán Cortes decidió viajar a Honduras para poner orden en la conquista. Todo esto ocurrió entre 1524 y 1528.

Desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX, Guatemala fue la Capitanía General en Centroamérica, conocida también como Reino de Guatemala, y como tal formó parte del Virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, dependía jurídicamente del virrey de España, residente en Ciudad de México. Durante el período de vigencia de la Constitución de Cádiz (entre 1812 y 1821), el concepto de *"Reino"* fue reemplazado por el de Provincia de Guatemala y Provincia de Nicaragua y Costa Rica. En 1821, México se independizó de España. En igual período lo hizo la Provincia de Guatemala, un 15 de septiembre, y la fecha fue dominante para casi todos los países de la región.

En julio de 1823 se reunió en Guatemala la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias unidas de Centro América, y declaró la independencia absoluta de España, de México y de cualquier otra subordinación extranjera, para establecer una forma de gobierno republicano. En 1840 la población de la región sumaba 1.287.490 habitantes.

América Latina

El inicio de las repúblicas en Centroamérica, como en el resto de América Latina, no fue propicio ni favorable para los Pueblos Indígenas. Entre 1870 y 1944, el tema indígena era concebido en Centroamérica como un *"problema"*, noción basada en las reminiscencias de la concepción colonial y de la conquista. Las representaciones sociales del tema eran comunes a la de *"bárbaros, rebeldes, ignorantes y manipulables"*. En Chile serían significados como indios flojos, borrachos y analfabetos.

Los indígenas, ya derrotados y sometidos por la conquista, debieron trabajar en condición esclava y, además, tuvieron que rendir tributos a sus nuevos amos. Los colonos usufructuaron de esos impuestos de manera muy extensa y negaron a los indígenas sus derechos de tierra. En todos los casos en donde fuese necesario, los nuevos regentes emplearon sin pudor la fuerza bruta para despojar a otros grupos aborígenes de sus territorios, y a los sobrevivientes los colocaron en reducciones. Por cierto, estos procesos afectaron de manera profunda la organización comunitaria ancestral y las tradiciones de las poblaciones indígenas de la región conquistada.

Con el advenimiento de los regímenes coloniales y de las nuevas repúblicas, la situación de sometimiento de las poblaciones indígenas sería más extensa y profunda. Los criollos —una nueva clase social, por decirlo de un modo— ocuparon la plenitud de los nuevos poderes, mientras los Pueblos Indígenas, ya sometidos, quedaron reducidos a una mínima expresión. Las tierras más fértiles conformaron las nacientes haciendas y la división de la sociedad no solo se fundó en un nuevo modelo de producción agraria, sino que además se hizo ostensible su división en grupos sociales donde los indígenas llevaron —y han seguido llevando de manera permanente— la peor parte.

Durante el desarrollo de las repúblicas, tanto en Centroamérica como en el resto del continente, las características tradicionales de las poblaciones indígenas, tanto culturales como sociales, fueron vistas o percibidas como un gran problema para la viabilidad de una idea hegemónica de un tipo de sociedad con una identidad única, castellana. Algunas sociedades hicieron frente a este problema con una política de exterminio de tales poblaciones. Tal fue el caso en Argentina, Uruguay y parte de Brasil. También ocurrió en Chile, por ejemplo respecto de los indígenas Onas en el extremo sur. Ello trajo como *"beneficio"* el despojo de las tierras que quedaban *"sin dueños"* y la ampliación de los procesos colonizadores sin mayores obstáculos, dado que quienes podrían haberse opuesto, sencillamente ya no existían. Otras modalidades fueron las concernientes a proyectos de *"reducción"* de indígenas, es decir, su reclusión en determinadas zonas geográficas bajo diversas normas represivas, tal como ocurrió en Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá.

Otras repúblicas optaron por una combinación de estos procesos, pero con un énfasis mayor en una estrategia *"integracionista"*, basada en la aplicación de políticas de asimilación cultural, como ocurrió en Bolivia, México y Perú. Surgieron de este modo iniciativas gubernamentales con *"sello indigenista"*. Algunos inspiradores de esta modalidad optaron por este camino, menos brutal que el exterminio directo de grupos humanos aborígenes, bajo la hipótesis de que mediante estos procesos de integración y asimilación, los indígenas irían perdiendo de manera progresiva su condición de tales y de este modo dejarían de existir —socialmente, se entiende— como grupos culturales con identidad propia.

Avanzada la primera mitad del siglo XIX y con la creciente necesidad y urgencia de prosperar en materia económica y territorial, los Estados nacionales, en general, requerían consolidar una sola idea de nación, de lengua, de religión y territorio. La sola posibilidad de que algunos grupos pudiesen reclamar una forma de identidad diferente era considerado como una amenaza: lo indígena no podía cruzarse en el proyecto de Estado nacional. No obstante, el caso es que la existencia de comunidades indígenas era un dato de la causa, y ni las políticas anteriores de exterminio ni los proyectos asimilacionistas fueron suficientemente eficaces.

Para ciertos sectores moderados, en cambio, la llamada problemática indígena representaba un problema de pobreza que debía ser resuelto por políticas gubernamentales un poco más sensibles.

Para el mundo conservador el tema no era tal, aunque fuese un dato de realidad, pues la pobreza era un fenómeno extendido y no afectaba solo a los indígenas. Este mundo nunca tuvo (ni ha tenido) una especial preocupación antropológica ni sociológica, ni menos política, por la realidad social de los indígenas, pues al reducirlos a un estado amplio de invisibilidad en diversos órdenes de cosas, y siendo dichos pueblos expresiones minoritarias o incluso relativamente minoritarias, el sentido vanguardista o iluminador del pensamiento conservador no podía considerar a los indígenas como *"sujetos sociales"*, ni mucho menos como *"sujetos de Derechos"*.

Para la izquierda tradicional, especialmente la que emerge con fuerza luego de la gran depresión de 1929, los indígenas formaban parte del amplio conglomerado de clases sociales oprimidas —particularmente del campesinado más pobre— y, por lo tanto, su suerte dependía en muchos aspectos de las victorias o derrotas del movimiento obrero y popular. En algún sentido, estos sectores más revolucionarios coincidían con el mundo conservador en su apreciación de que el tema indígena tenía alguna forma de vinculación con los modelos de producción.

Esta izquierda tardará muchos años, incluso hasta hoy en pleno desarrollo del siglo XXI, para comprender que la llamada *"cuestión indígena"* requería (y sigue requiriendo) un abordaje político distinto en cuanto a la forma de entender la dimensión social, política y cultural que está presente en la realidad de los Pueblos Indígenas. Los obreros no tienen un territorio ancestral que reivindicar: tienen demandas intangibles, justas y legítimas (mejor empleo, mejor salario, etcétera), pero no reclaman tierras, ni derecho de aguas. Las masas obreras y populares no consideraron el valor del equilibrio natural de nuestros ecosistemas como un componente esencial de sus luchas. Protestaron contra la Revolución Industrial por el efecto que ella tuvo en la incorporación de la modernización tecnológica, y finalmente se rindieron al desarrollo expansivo de la industrialización.

La lucha de los movimientos indígenas

La lucha de los movimientos populares ha sido siempre, fundamentalmente, por mayores espacios de poder político. La lucha de los movimientos indígenas es mucho más planetaria, porque involucra una cosmovisión con componentes milenarios, religiosos, sociales y culturales. Pero todo esto no podía ser comprendido por los líderes de la izquierda tradicional, pues su formación y experiencia en el ámbito de las luchas políticas y de confrontación en contra del Estado capitalista solo podía entender lo indígena como un componente más del campesinado pobre.

El cuadro comienza a cambiar en la segunda mitad del siglo XX, y particularmente hacia finales de ese período, a partir de la década de los años noventa, cuando se produce el fenómeno de la llamada "*conmemoración del Quinto Centenario*" del descubrimiento de América, y España propone un vasto plan que relevase como una celebración el llamado "*encuentro entre dos mundos*". Previamente, desde 1950 en adelante, ya habían asomado movimientos indigenistas en distintas partes del continente, con una gran capacidad de dilucidar el contenido de un relato con identidad propia, pero se requería tiempo para que ello plasmase en nuevas generaciones.

La oportunidad llegó con el Quinto Centenario, desde el momento en que desde distintas partes de Centroamérica y América Latina surgieron grupos, personalidades, comunidades e intelectuales indígenas que se preguntaron sobre de qué encuentro se trataba, pues lo acontecido históricamente es que el descubrimiento de América, hacía 500 años, solo había sido una auténtica colisión entre dos civilizaciones: una, proveniente de allende la frontera de nuestras costas, que arribó a Centroamérica en 1492 con sus cruces y arcabuces; y otra, las civilizaciones existentes en estas tierras desde hacía mucho tiempo antes de la llegada de Colón.

Por cierto, los aventureros, y más tarde, conquistadores españoles, no estaban en condiciones de comprender que más allá de la Europa cristiana y medieval, también existían otras civilizaciones y pueblos y culturas. La visión eurocéntrica era totalmente dominante. En consecuencia, arribar a las nuevas tierras descubiertas y encontrarse con "*entidades*" (léase gente) distintas era algo muy extraño para la culta y desarrollada "*civilización española*"...

Es en este marco que el "*Requerimiento*" fue un instrumento a su vez perverso y fascinante, pues con la idea de "*reglamentar*" (en realidad) las masacres de poblados indígenas, la Fe y la Corona concordaron en que era necesario "*normar*" el procedimiento de someter a los nativos, de tal modo que ello fuese "*bien visto*" a los ojos de Dios. Era "*civilizado*" reunir a la poblada (ya suficientemente asustada por estos individuos con corazas brillantes y montados en caballos gigantescos y dotados de armas nunca antes vistas) en el centro de la comunidad y "*requerir*" de su parte total obediencia y sumisión a la Iglesia y los Reyes Católicos.

Es de imaginar la escena: un grupo abarrotado de personas, rodeadas de una fuerza militar insuperable, escuchando en una lengua extraña, un conjunto de palabras que sonaban —seguramente— duras y firmes, y sin saber qué responder. El desconcierto solo duraría unos cuantos minutos, hasta la orden de exterminio por no dar respuesta clara y precisa a lo que se requería en nombre de Dios y de la Corona.

¿Qué "*encuentro de civilizaciones*" podía ser aquello? Con justa razón los movimientos indigenistas emergentes procedieron a poner en blanco y negro el llamado de España para "*celebrar*" el Quinto Centenario, y he aquí

que dicha convocatoria fue, en realidad, la mejor excusa y oportunidad para iniciar un amplio levantamiento de conciencia que no se ha detenido en todos estos años, y que a partir de 1992 ha llevado a la realización de marchas, coloquios, encuentros internacionales y entre países. Los dirigentes indígenas llamaron a un amplio cuestionamiento del Quinto Centenario y diversos Gobiernos se vieron en duros aprietos para responder a la buena voluntad de España, modificando muchas de las actividades “*conmemorativas*” programadas.

Los medios de prensa, la naciente e incipiente cadena de redes virtuales y universidades, fundaciones y organismos no gubernamentales, abrieron un amplio espacio al debate público, y a partir de 1992 el tema indígena, ahora ya no como un acápite del movimiento obrero y popular sino como un movimiento con identidad propia, se ha ido abriendo paso intensamente con demandas que concentran una especial atención en el continente.

En un trabajo titulado “*Democracia y participación política de los Pueblos Indígenas en América Latina*”, Julio Ruiz Murrieta¹ ofrece una interesante descripción acerca de cómo se ha ido expresando la emergencia de movimientos y grupos indígenas con identidad propia. Señala, por ejemplo, a organizaciones como la Federación Shuar (Ecuador), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Colombia), el Movimiento Katarista (Bolivia) y el Congreso Aguaruna-Huambiza (Perú), entre otros, que iniciaron en la década de los años setenta este movimiento autoidentificadorio. Es interesante cómo se refiere al hecho singular de que el llamado “*Manifiesto de Tihawanaku*” (1973) aparezca como uno de los documentos más relevantes que establecen —dice el autor— “*la separación de la orientación estrictamente económica del movimiento campesino de Bolivia y la elaboración de una ideología cultural y étnica*”. Estas entidades, señala Julio Ruiz, inspiran el surgimiento de otras entidades indigenistas en América Latina, tales como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (México, 1975).

Coincidió también con el autor en un asunto no menor de estos nuevos escenarios. No es solo la llamada y cuestionada “*conmemoración*” de los 500 años del descubrimiento lo que cataliza la irrupción de un nuevo enfoque indígena. Él señala otros procesos complementarios, tales como “*el establecimiento de los procesos electorales, la caída del comunismo en la Unión Soviética y en los países del Este, la aparición de la Teología de la Liberación en América Latina y la emergencia del tema ambiental a nivel mundial*”.

1 Julio Ruiz Murrieta, “*Democracia y participación política de los pueblos indígenas en América Latina*”, Documento de Debate N° 47, Gestión de las Transformaciones Sociales MOST (París: Unesco, 2003). En <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129780s.pdf>.

La caída del muro de Berlín en Europa implicó otro aspecto no menor: las teorías de la izquierda tradicional, movimientista y obrerista, se debilitaron de manera notable y, por cierto, la idea de entender a los indígenas en tanto campesinos y solo aliados del movimiento obrero fue perdiendo rápidamente todo sostenimiento teórico.

A nivel mundial, organismos fundamentales como Naciones Unidas y la Iglesia católica, en diversas circunstancias y documentos han plasmado, a partir de los años ochenta, planteamientos y compromisos que le han brindado un estatus especial y muy relevante al tema indígena. En particular, cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007 y suscrita por más de 140 países. Aunque es un documento que no tiene aún un carácter vinculante para los Estados, su sola promulgación —como ocurrió en diciembre de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos en París— implica como dato definitivo que las sociedades y los Estados deben tener presente tales derechos como una cuestión sustantiva en el reordenamiento de los sistemas democráticos de cada sociedad.

Antes de tal declaración, los Pueblos Indígenas ya contaban a favor (y siguen contando con ello) con el poderoso Convenio 169 de la OIT, un Tratado internacional de Derechos Indígenas que sí tiene carácter vinculante y que ha permitido abrir muchos caminos políticos. Este Convenio fue aprobado por la OIT en 1989. Chile demoró 18 años en reconocerlo, ratificarlo y promulgarlo como Ley de la República. Fue el país número trece en aprobarlo, en América Latina. Este proceso de ratificaciones en un continente indio-afro-descendiente como es en nuestra región siguió el siguiente calendario: 1990 México, 1991 Bolivia-Colombia, 1993 Costa Rica-Paraguay, 1994 Perú, 1995 Honduras, 1996 Guatemala, 1998 Ecuador, 2000 Argentina, 2002 Brasil-Venezuela, 2008 Chile, 2010 Nicaragua.

Cuando fue necesario establecer un diálogo con los Pueblos Indígenas, el gobierno de Vicente Fox, en México, instaló la Instancia Consultiva Mexicana para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, poniendo fin a un ciclo de políticas asimilacionistas. Más tarde, y en el contexto de un complejo escenario político, México aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígena.

Es notable destacar que en Guatemala, a diferencia de Chile, desde los años noventa diversos grupos y movimientos indígenas llevaron a cabo una estrategia de inserción en diferentes organizaciones políticas y se involucraron abiertamente en procesos electorales. Accedieron así a Municipios, Parlamento y Gobierno. En el Ejecutivo pudieron desarrollar entidades ministeriales y lograron —entre otros aspectos— que algunos profesionales indígenas fuesen insertos en el Cuerpo Diplomático. Chile demoró exactamente 196 años para incorporar por primera vez a un

Mapuche como Embajador, precisamente en Guatemala. Y en este país se han creado la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en contra de Pueblos Indígenas.

Guatemala aprobó, el 26 de mayo de 2003, la Ley de Idiomas Nacionales, que oficializa para todo el país el uso de idiomas indígenas, y se creó la Academia Nacional de Lenguas Mayas. En Chile llevamos varios años impulsando una Ley de Lenguas Indígenas. Y solo hace un breve tiempo, recién, se ha logrado ingresar un proyecto al Congreso chileno.

Ecuador es otra nación donde los Pueblos Indígenas han sido capaces de desarrollar una estrategia de inserción en la estructura gubernamental. Fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) la entidad que impulsó estos procesos, e incluso tuvo un protagonismo fundamental en la caída de dos presidentes (Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad), en un contexto de amplias protestas sociales. En 1998, los Pueblos Indígenas lograron que la nueva Constitución ecuatoriana reconociese su diversidad cultural y se incorporase los derechos indígenas en su normativa jurídica. Otro indígena, Evo Morales, en Bolivia, levantó una candidatura presidencial y quedó segundo, en julio de 1998... Su historia posterior ya es conocida ampliamente.

En Argentina destacan la Asociación Indígena de la República de Argentina (AIRA) y la Asociación de Juristas Indígenas, entidades que impulsaron, entre otras tareas, las reformas de la Constitución de 1994, donde la historia ancestral de los indígenas fue reconocida constitucionalmente, como también sus tierras y derechos lingüísticos.

Actuales procesos de construcción de identidad de Pueblos Indígenas

Los anteriores son solo ejemplos de procesos de emancipación de grupos, liderazgos y movimientos indígenas que superaron la condición de "*campesinos pobres*" (aunque una masa muy extendida de indígenas sigue trabajando el campo y sigue siendo pobre), y han logrado constituir una identidad de Pueblo-Nación a partir de los valores, historia y organización ancestral que lograron mantener vivos desde el descubrimiento y la conquista.

De acuerdo con el artículo de Julio Ruiz, hay varios procesos que contribuyen poderosamente a este avance histórico.

Transformación de instituciones y políticas indigenistas. Esto implica que entre los años sesenta y noventa se transitó desde organismos estatales que acogieron las tesis del asimilacionismo e integracionismo como modelo de desarrollo de la política indígena, a instituciones que van emergiendo con una fuerte identidad étnica. Por lo tanto, el eje de las teorías que

sustentan esta transición es, fundamentalmente, el reconocimiento de que los grupos y movimientos indígenas representan, en realidad, una forma de sociedad y de cultura que solo adquiere relevancia en el marco de una sociedad pluricultural y que ello requiere una concepción de Estado plurinacional.

Marcada presencia territorial indígena. Ello está definido por el hecho de que los movimientos indígenas, en este nuevo contexto de emancipación, demandan un reconocimiento efectivo de sus tierras y territorios, de sus aguas y bosques, de los cuales han sido depositarios ancestrales. Por lo tanto, los Estados se han visto en la obligación de ir acogiendo y acomodando las normas necesarias para hacer cumplir los derechos que en este sentido están contemplados en el Convenio 169.

Nuevas formas de organización y liderazgos indígenas. El acceso a la educación, la inserción de indígenas en los sistemas sociales y políticos, el desarrollo de amplias potencialidades culturales de los indígenas y su protagonismo en favor de un medio ambiente autosustentable, han permitido que emerja una nueva expresión organizacional de los Pueblos Indígenas. Estos, sin dejar atrás su pasado rural y falta de oportunidades, recogen el legado de los antepasados, pero proyectan nuevas dimensiones en el marco de una sociedad global: el mundo indígena de hoy, social y culturalmente hablando, es un mundo muchísimo más instruido que el de nuestros antepasados; y, por lo tanto, está en condiciones de continuar y extender un proceso de emancipación que no podrá ser contenido ni desviado.

Relación conveniente con los modelos de mercado. Casos tan relevantes como los del Pueblo Maorí en Nueva Zelanda o de Pueblos Indígenas en Canadá e incluso en Estados Unidos, con un alto nivel de desarrollo e inserción en las economías de esos países, están indicando que los Pueblos Indígenas también están en condiciones de producir riqueza, e incluso administrarla, con un sentido socialmente muchísimo más responsable que el de proyectos empresariales depredadores del medioambiente y de nuestras riquezas naturales. Es notable, por ejemplo, el trabajo que Comunidades Indígenas Maya llevan a cabo como administradores de una de las reservas más importantes de Centroamérica. Se trata de la Biósfera Maya de Petén, creada en 1990, con más de 1.600.000 hectáreas y varias zonas de protección formadas por diferentes reservas y bosques naturales en los que no se permite la intervención humana, como Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, el Mirador Azul y la histórica Tikal. Es una zona con importantes sitios arqueológicos que es administrada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con la participación relevante de organizaciones indígenas que a través de trece empresas comunitarias cuentan con concesiones forestales de largo plazo. A veinte años de su creación, esta gran reserva natural de Guatemala conserva más del 70% de su riqueza natural intacta.

Casos como los descritos demuestran que los Pueblos Indígenas están desarrollando también capacidades y competencias suficientes para hacerse cargo de procesos productivos relevantes para la sociedad. Más temprano que tarde esta tendencia se irá expandiendo en nuestros países, con lo cual se irá requiriendo importantes ajustes políticos y económicos, con identidad étnica.

Modificaciones en la relación entre Pueblos Indígenas y Estado. Los Pueblos Indígenas han ido alcanzando en las últimas décadas un mayor poder o potencial de negociación con el Estado y diversas entidades de la sociedad. Claramente, son actores autónomos respecto de partidos políticos y movimientos sociales tradicionales. Han forjado una identidad propia, han sostenido los valores de sus organizaciones ancestrales, han sobrevivido por siglos a los procesos de integración y asimilación, han mantenido su cosmovisión del mundo, no han sucumbido a la extinción ni a la exclusión o discriminación: son actores socialmente potentes y, en el contexto actual, no son sujetos a los que se pueda desconocer, ni mucho menos invisibilizar. Menos se podrá minimizar su importancia política, aunque no se en términos de su mayor o menor influencia electoral (tema igualmente relativo si comparamos las diferencias demográficas de Chile con países como Guatemala o Bolivia, donde el voto indígena tiene un peso significativo). El tema no radica en el peso electoral relativo de los indígenas. Se funda, principalmente, en su identidad étnica, en su condición de Pueblo-Nación. Con el reconocimiento (explícito o no) de esta característica, ya no será posible para nuestros Estados y sociedades continuar sosteniendo por mucho tiempo más un carácter único, nacional: un solo pueblo, una sola lengua, una sola cultura y, hasta hace un tiempo, una sola religión.

La prospectiva de los Estados Nacionales en América Latina: Estados Plurinacionales, en el marco de sociedades pluriculturales

Los Pueblos Indígenas son expresión auténtica y legítima de las nuevas dimensiones reseñadas. Por lo tanto, serán sujetos políticos esenciales en la ampliación y fortalecimientos de nuevos sistemas y regímenes democráticos. Esto será así en las próximas décadas.

El camino hoy, no obstante, es complejo y difícil. Los Estados, los partidos políticos, parte importante de la sociedad y del empresariado, incluso en determinados centros académicos, todavía no logran comprender totalmente la dimensión de este proceso y se continúa creyendo que "*lo indígena*" es como un tema "*aparte*". ¿Aparte de qué?

Este contexto también se complejiza porque los Pueblos Indígenas, luego de una agitada relación con gobiernos de todo tipo, a lo largo de la historia de América Latina, si algo han comprendido e internalizado es que los

Estados y los Gobiernos no brindan confianza y que sus compromisos se disuelven rápidamente. Entonces, la sociedad indígena y la sociedad no-indígena requieren recrear puentes de confianza, y esto será materia de tiempo. Tales puentes van a ir surgiendo de todas maneras, por mucho que se crucen intereses privados o públicos.

Y esos intereses son todavía un problema crítico para la conformación de un Estado y sociedad plurinacionales. En Centroamérica, la población indígena en Costa Rica y Honduras fue reducida a una mínima expresión demográfica. No así en Nicaragua o El Salvador. En Guatemala representa una población predominante. Los Pueblos Indígenas en distintos lugares enfrentan todavía una muy alta concentración de la propiedad de la tierra (y mucha de esa tierra tiene una historia ancestral). Salvador y Guatemala han enfrentado guerras civiles que afectaron de manera profunda a las comunidades indígenas: de ellas proviene la mayor parte de las víctimas. En Nicaragua, la revolución sandinista instaló un sistema centralizado de producción. En los demás países de la región impera un modelo de economía de mercado, y los Pueblos Indígenas presentan, además, muy altos índices de pobreza, desnutrición y analfabetismo.

Todo esto indica, en consecuencia, que la demanda y propuesta indígena tiene por delante un complejo escenario de al menos una década más para encontrar y desarrollar respuestas políticas con identidad étnica que viabilicen un tipo de sociedad y un tipo de Estado con mayor equidad social y política.

Para Chile, la perspectiva del bosque, es decir, la experiencia que se recoge desde la realidad de los Pueblos Indígenas de Centroamérica, es, sin lugar a dudas, de una enorme importancia.